

Defensa judicial

21 de marzo de 2022 al 25 de marzo 2022

Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico



Se mantienen los deberes de las partes en la obtención de pruebas

La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 78 (numeral 10), 85 (numeral 1) y 173 (parcial) de la Ley 1564 del 2012 (Código General del Proceso). En la demanda se solicitaba la inexequibilidad de las normas acusadas, por considerar que vulneraban el núcleo del derecho al debido proceso, al restringir exageradamente (desproporcionalmente) las posibilidades de las partes de un proceso judicial para probar los hechos. Esto porque el incumplimiento, en su criterio, traía como consecuencia la imposibilidad posterior del juez de decretar la consecución de la prueba en el caso del numeral 10 del artículo 78 del CGP, y de que este no tuviese la obligación de solicitar a terceros la prueba requerida para la admisión de la demanda.

Test de proporcionalidad

El alto tribunal realizó un test de proporcionalidad para determinar si las normas acusadas están suficientemente justificadas y sus consecuencias son constitucionalmente admisibles, encontró que:

Los contenidos normativos acusados persiguen la realización de importantes principios constitucionales, en tanto se inscriben dentro de las llamadas cargas procesales que aluden a la organización de un proceso judicial con carácter dispositivo, de tal manera que garantice los principios de igualdad de las partes y lealtad procesal, sin afectar los principios de imparcialidad e independencia del juez.

Los contenidos normativos acusados constituyen un medio adecuado para realizar los principios constitucionales de igualdad, toda

vez que las cargas procesales que contienen contribuyen con lo propio de manera efectiva, ya que su cumplimiento permite organizar el adelantamiento del proceso, de tal manera que este no resulte caótico.

Las normas acusadas no son evidentemente desproporcionadas porque está justificada la afectación de aquellos principios que promocionan la verdad como justicia, en favor de aquellos que promocionan la imparcialidad, la igualdad y la lealtad como justicia.

Decisión

La Corte indicó que una de las formas en la que se satisface la verdad en el proceso como forma de justicia es precisamente obligando a las partes a cumplir con sus cargas procesales, y así al juez a honrar dicha obligación. Por eso no es razonable sostener que tras perder la oportunidad procesal de aportar una prueba al expediente se configura una afectación desproporcionada del propósito constitucional del derecho a la prueba, cuando ello tiene como causa el incumplimiento de uno de los medios para ello, cual es el establecimiento de cargas procesales en materia probatoria.

Finalmente, precisó la Sala que una prueba que no se decrete en el proceso con base en el incumplimiento de una regla procesal (carga procesal) no significa que se ha sacrificado el derecho sustancial por privilegiar las formas (artículo 29 superior). Esto por cuanto de un lado la obtención de la prueba se constituye como una obligación de medio y no de resultado; la prueba garantiza una posibilidad y no una certeza en cuanto a la verdad en el proceso. Y de otro lado dichos preceptos analizados no afectan la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas; siempre podrá hacerlo si así lo considera (M.P. Karena Caselles).

Corte Constitucional, Comunicado, Sentencia C-099, 17/03/2022..

Defensa judicial

Suspensión del contrato de trabajo de personas en circunstancias de debilidad manifiesta

Respecto a la suspensión del contrato de trabajo de personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por razones de salud, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente:

Si bien la enfermedad se tuvo como causal para suspender el contrato de trabajo en el entonces Decreto 2127 de 1945, lo cierto es que ello fue derogado por el Decreto 2541 de 1945.

La incapacidad ocasionada por enfermedad del empleado no constituye causal para suspender el contrato de trabajo, dado que no está prevista de forma taxativa en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.

Durante la incapacidad por enfermedad del empleado, el contrato de trabajo tiene plena vigencia y los deberes del empleador no sufren alteración alguna, y

no es dable considerar la enfermedad como circunstancia atribuible al empleado, ya que claramente es un hecho extraño a él, por ende, no puede afectar sus intereses.

En ese sentido, la suspensión de los contratos debe ser pactada de mutuo acuerdo y no puede ser indefinida. Además, no es posible suspender los contratos de trabajo de las personas que se encuentren con estabilidad reforzada sin que medie también autorización por parte del inspector de trabajo, pues es evidente que esta circunstancia afecta los derechos del trabajador y lo pone incluso en una situación de desventaja. En otros términos, la suspensión de los contratos de trabajo en el caso de personas con garantía de estabilidad reforzada no solo los pone en situación de desventaja, sino que puede aumentar su condición de debilidad manifiesta y agravar su situación de vulnerabilidad.

El derecho a la no discriminación laboral por razones de salud que limitan el desempeño de las funciones de los trabajadores

Se ha reiterado que están en circunstancia de

debilidad manifiesta aquellos que han sido calificados con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, así como aquellos cuya salud se haya afectado y que les impide o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares. La jurisprudencia da cuenta que esas personas igualmente se encuentran en riesgo de ser despedidas por dicha causa y, por ende, a que los discriminen por razones de salud

En conclusión, la estabilidad laboral reforzada no se limita a aquellos que tengan una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, fijada de conformidad con la respectiva normativa, sino a todos aquellos en circunstancia de debilidad manifiesta, evaluados según los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional (M. P. Alberto Rojas Ríos).

Corte Constitucional, Sentencia, T-035, 07/02/2022.

Requisitos para que proceda la suspensión provisional de actos administrativos

La suspensión provisional, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política, fue concebida para defender el ordenamiento superior cuando los actos administrativos incurren en violación de las normas en las que deben fundarse, recordó el Consejo de Estado. Con la adopción de esta medida cautelar se detienen temporalmente los efectos de los actos administrativos y, por lo mismo, se suspende su fuerza obligatoria.

Para la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo cuya nulidad se pretenda, el artículo 231 del CPACA exige que se reúnan en forma concurrente los siguientes requisitos:

Que se presente una violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado.

Que esa violación surja de la confrontación directa con las normas invocadas o con las pruebas allegadas con la solicitud.

Que si el medio de control es el de nulidad y

Defensa judicial



restablecimiento del derecho se demuestre, aunque sea sumariamente, el perjuicio que el acto demandado causa o podría causar al actor.

Facultad de autorizar al gobernador para celebrar contratos

Al respecto, la Sección Tercera precisó que el gobernador no requiere de una autorización general para contratar por parte de la asamblea departamental, ya que están autorizados por el Estatuto de Contratación Pública, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y por la aprobación anual del presupuesto, y no hay una norma legal que establezca que los contratos de obra pública superiores a 8.000 SMLMV deban ser autorizados previamente por la corporación departamental, lo que en el caso concreto explica que la ordenanza que reglamentó las autorizaciones al gobernador para contratar fue expedida sin competencia, lo que confirma la medida cautelar sobre este acto (M. P. Guillermo Sánchez Luque).

Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia, 50001233300020160004302 (66303), 13/12/2021.

Conozca cómo es la solución de conflictos de competencia entre administradoras del RPM y del RAIS

En caso de presentarse un conflicto de competencias de esta naturaleza, el régimen responsable del pago de una pensión de invalidez “será aquel en donde estaba afiliado un ciudadano para el momento en que se estructuró su pérdida de capacidad laboral. La fecha de estructuración será el elemento que resuelva cualquier conflicto de competencias que se suscite entre administradoras del RAIS y del RPM”, precisó la Corte Constitucional.

Lo anterior, explica la Sala, tiene fundamento en que la invalidez es un riesgo y para ser protegido debe ser –por regla general– futuro e incierto. El hecho de ordenarle al fondo nuevo reconocer una pensión que se causó antes de que el beneficiario estuviere afiliado a él implicaría exigirle que amparare un hecho ya consolidado, mas no un riesgo.

www.cali.gov.co/juridica

Así mismo, del artículo 3.2.1.12 del Decreto 780 del 2016 se desprende que aun cuando exista un traslado el fondo antiguo mantiene la competencia para el reconocimiento de prestaciones que se causen en su vigencia.

Finalmente, esta regla es la que mejor armoniza con el sistema de financiación previsto por el legislador para las pensiones de invalidez. Con su aplicación no se afecta el derecho a la libertad de elección de régimen pensional, ni se limita el derecho a la seguridad social.

Se concluye entonces que: (i) el régimen responsable por el pago de una pensión de invalidez será aquel en donde estaba afiliado un ciudadano para el momento en que se estructuró su pérdida de capacidad laboral; (ii) la fecha de estructuración será el elemento que resuelva cualquier conflicto de competencias que se suscite entre administradoras del RAIS y del RPM y (iii) si un traslado se produce en el intervalo comprendido entre la fecha de estructuración y la fecha en que es calificada la persona, los dineros que se remiten al fondo nuevo se calculan con base en la fórmula de traslados del RAIS al RPM, cuando ese sea el caso.

El caso concreto

Se atribuye una vulneración de derechos fundamentales al hecho de no responder de manera oportuna una solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y, en consecuencia, a la falta de resolución en la definición de la situación pensional.

Frente a estos hechos, la Sala concluyó que se vulneró el derecho fundamental de petición y los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante, porque no hubo respuesta de fondo ni de manera oportuna a la petición que presentó para iniciar el trámite de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, de acuerdo con lo previsto por el artículo 3.2.1.12 del Decreto 780 del 2016, y según la regla fijada por la Sala Plena en la Sentencia SU-313 del 2020.



Defensa judicial



Sobre el responsable del pago de una pensión de invalidez, la corte afirma que la fecha de estructuración será el elemento que resuelva cualquier conflicto de competencia que se suscite entre administradoras del RAIS y del RPM (M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera).

Corte Constitucional, Sentencia, T-045, 14/02/2022

Precisan aplicación exegética del término de caducidad de la acción de reparación directa

Se vulneran derechos fundamentales cuando un juzgado realiza una aplicación exegética del término de caducidad previsto en el artículo 164, numeral 2 i, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) inobservando ciertos compromisos internacionales relacionados con la especial protección que debe brindarse a las mujeres en circunstancias de violencia sexual, lo cual demanda de las autoridades públicas poner de relieve todas las complejidades que concurren en una agresión.

El caso concreto

En el año 2020 se interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de varias entidades, pretendiendo que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por el daño antijurídico causado a los demandantes por las presuntas fallas en el servicio por omisión en su posición de garantes, como consecuencia de los atentados contra la integridad física y sexual de que fue víctima la actora en un centro hospitalario por parte de un médico adscrito, cuando se encontraba en estado de indefensión por su situación de salud.

Las autoridades judiciales cuestionadas, dando aplicación a lo preceptuado en el artículo 164 del CPACA, rechazaron la precitada demanda por operar el fenómeno de la caducidad de la acción.

Por ello, se presentó desconocimiento del precedente constitucional, al no haber aplicado la Sentencia SU-659 de 2015, en lo que respecta a la flexibilización del conteo del término para interponer la acción de reparación directa. La Sala concedió la tutela, dejando sin efecto las decisiones cuestionadas y se ordenó la emisión de un nuevo pronunciamiento sobre la admisión del proceso administrativo (M. P. Alberto Rojas Ríos).

Corte Constitucional, Sentencia, T-026, 01/02/2022

Fuente: Legismovil – Boletín Oficial
Artículo 20

Elaboró: Carlos Alberto Aponte García- Contratista

Revisó: Dra. Martha Lucia Triana López - Asesor

Aprobó: Dr. Hugo Alejandro Jiménez Balcázar – Subdirector de
Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico